***ORALIDAD***

***Providencia****:* *Sentencia de Segunda Instancia, Jueves 14 de szeptiembre de 2017*

***Radicación No****:**66001-31-05-005-2014-00361-01*

***Proceso****:* *Ordinario Laboral*

***Demandante****: Martha Cecilia Lozano*

***Demandado:*** *Colpensiones y Ministerio del Trabajo*

***Juzgado de origen****: Quinto Laboral del Circuito de Pereira*

***Magistrado Ponente:*** *Francisco Javier Tamayo Tabares.*

***Tema a tratar: Valoración Probatoria. Diferencia entre acto que requiere prueba solemne y las formalidades que debe tener un medio probatorio.*** *Sin embargo, no debe confundirse que un determinado acto sea solamente acreditable mediante una solemnidad determinada, con que un documento deba ser aportado con ciertos presupuestos especiales, pues en este caso el acto que se pretende probar no está sometido a una prueba solemne, pudiéndose acreditar por cualquier medio probatorio. En este caso, el medio que no cumpla con las exigencias especiales señaladas por el legislador, no será descartado, sino que requerirá una valoración especial y más rigurosa por parte del operador jurídico.* ***Documentos expedidos en el extranjero que no cumplen las formalidades. Valor probatorio.*** *Entratándose de documentos expedidos en un país extranjero, de conformidad con el canon 251 del CGP, los mismos deben aportase al proceso debidamente apostillados con la autenticación del cónsul o agente diplomático de Colombia o de un país amigo. Sin embargo, la ausencia de estos aspectos, se insiste, no puede entenderse como la consecuente ausencia de validez probatoria del documento, sino que el mismo debe ser valorado de manera más estricta, ya como un hecho indicante y atendiendo los restantes medios probatorios que obran en el infolio, las circunstancias del pleito y la conducta procesal de las partes, poder inferir de él de manera lógica un hecho indicado.*

**AUDIENCIA PÚBLICA:**

En Pereira, a los catorce (14) días del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017), siendo las once y quince de la mañana (11:15 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia del 23 de febrero de 2016 dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ***Martha Cecilia Lozano*** contra ***Colpensiones*** y al cual se vinculó al **Ministerio del Trabajo*.***

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES:**

***I. INTRODUCCIÓN***

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, dígase que se persigue la declaratoria de que la demandante tiene derecho a que se conceda y reconozca la pensión de vejez de conformidad a la Ley 1112 de 2006, sumando el tiempo cotizado tanto en Colombia como en España, que la demandante además, es beneficiaria del régimen de transición establecido en el canon 36 de la Ley 100 de 1993 y por ende debe regularse su prestación de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 y que la misma debe concederse desde el 01 de julio de 2012. En consecuencia, pide que se fulmine condena contra la sociedad demandada, en el sentido de pagar la pensión de vejez desde la fecha anotada, con los intereses moratorios de que trata el canon 141 de la Ley 100 de 1993 o la indexación de las condenas y las costas del proceso. En subsidio de lo anterior, pide que la prestación se rija por la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 y en consecuencia pide que se impongan iguales condenas.

Como sustento fáctico de tales pedidos se relata que la actora nació el 05 de junio de 1951, que durante su vida laboral efectuó cotizaciones en Colombia a Colpensiones por 1.010 semanas, que laboró en España y se hicieron cotizaciones al sistema de seguridad social de ese país entre el año 2000 y el 2013, que mediante escrito del 05 de julio de 2012 manifestó su retiro expreso del sistema pensional, a partir del 01 de los mismos mes y año, que es beneficiaria de transición por contar con más de 35 años de edad al momento de entrada en vigencia la Ley 100 de 1993 y que también cuenta con más de las 750 al momento de entrada en vigencia del Acto legislativo 01 de 2005, que la actora cumple con las exigencias de la Ley 1112 de 2006 para pensionarse sumando las semanas cotizadas en ambos países, que la demandante pidió el reconocimiento de la pensión en esos términos y que recibió respuesta negativa de la entidad.

Admitida la demanda se dio traslado a la sociedad demandada, la cual allegó respuesta por medio de apoderado judicial, quien se pronunció respecto a los hechos aceptando el alusivo a la fecha de nacimiento de la actora, que contaba con más de 35 años al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que se elevó reclamación pensional y que la entidad negó la pensión. Frente a los restantes indicó que no le constaban. Se opone a las pretensiones de la demanda y formula como excepciones de fondo las que denomina “Inexistencia de la obligación demandada” y “Prescripción”.

Posteriormente se vinculó al Ministerio del Trabajo, entidad que allegó respuesta por medio de profesional del derecho, manifestándose frente a los hechos indicando que no le constan, no se pronunció frente a las pretensiones y formuló como excepciones de fondo las de “Inexistencia de la obligación” y “Cobro de lo no debido”.

***II.******SENTENCIA DEL JUZGADO***

Agotadas las etapas correspondientes, la Jueza a-quo negó las pretensiones de la demanda al encontrar que la demandante si bien era beneficiaria de transición conforme al canon 36 de la Ley 100 de 1993, perdió tales beneficios por no cumplir las exigencias de cotización del Acto Legislativo 01 de 2005. En cuanto a los tiempos aportados en España, encuentra que los mismos no pueden tenerse en cuenta amén que no están debidamente certificados, y procedió a exhortar a las entidades encargadas a seguir el trámite ante las autoridades de España, con el fin de lograr la certificación de los tiempos servidos.

***III. APELACIÓN***

El portavoz judicial de la parte demandante interpuso y sustentó recurso de apelación, pidiendo que se continúen los requerimientos a las entidades con el fin de lograr obtener la certificación de los tiempos cotizados en España. Indica además que, ante la omisión de Colpensiones en el trámite respectivo, deben tenerse en cuenta los documentos que se aportaron como anexos a la demanda y que acreditan fielmente los tiempos que la señora Lozano prestó sus servicios en el Reino de España.

***IV. ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA***:

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, proceda a decidir lo de su competencia, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte demandante (art. 66 A CPLSS.).

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir lo que corresponda, previas las siguientes:

***V. CONSIDERACIONES***

***Del problema jurídico.***

El problema jurídico que plantea la consulta, se puede sintetizar en el siguiente interrogante:

¿Se pueden tener en cuenta los documentos aportados en copias simples, como suficientes para acreditar el tiempo aportado en el Reino de España?

En caso de darse una respuesta positiva al interrogante anterior ¿Acreditó la demandante, con la sumatoria del tiempo cotizado en Colombia y el Reino de España, el tiempo necesario para alcanzar la pensión de vejez pretendida?

En caso positivo ¿Cómo procede su pago conforme al convenio existente entre ambos países?

**Validez de los documentos aportados.**

En materia laboral al momento de valorar las pruebas, el Juez cuenta con la posibilidad de formarse libremente el convencimiento, tal como lo establece el canon 61 del CPTSS. Sin embargo, tal principio de valoración probatoria, encuentra como límite las solemnidades que exija la ley para tener por acreditados determinados actos; en cuanto a esta excepción, es indispensable precisar que la solemnidad que limita la libre formación del convencimiento, es frente al acto como tal, es decir, el Juez no puede tener por acreditado un hecho o acto determinado, para el cual la ley exige cierta formalidad, sino se aporta el documento que sustenta el cumplimiento de la misma. Por ejemplo, entratándose del estado civil de la persona, el mismo debe acreditarse con el respectivo registro civil.

Sin embargo, no debe confundirse que un determinado acto sea solamente acreditable mediante una solemnidad determinada, con que un documento deba ser aportado con ciertos presupuestos especiales, pues en este caso el acto que se pretende probar no está sometido a una prueba solemne, pudiéndose acreditar por cualquier medio probatorio. En este caso, el medio que no cumpla con las exigencias especiales señaladas por el legislador, no será descartado, sino que requerirá una valoración especial y más rigurosa por parte del operador jurídico.

Entratándose de documentos expedidos en un país extranjero, de conformidad con el canon 251 del CGP, los mismos deben aportase al proceso debidamente apostillados con la autenticación del cónsul o agente diplomático de Colombia o de un país amigo. Sin embargo, la ausencia de estos aspectos, se insiste, no puede entenderse como la consecuente ausencia de validez probatoria del documento, sino que el mismo debe ser valorado de manera más estricta, ya como un hecho indicante y atendiendo los restantes medios probatorios que obran en el infolio, las circunstancias del pleito y la conducta procesal de las partes, poder inferir de él de manera lógica un hecho indicado.

En el caso puntual, se tiene que el tiempo que la demandante laboró y cotizó en España, conforme a los lineamientos del convenio suscrito por ese país con Colombia, se debe certificar por la entidad de seguridad social de aquel, y obtenerse por intermedio de los organismos de enlace establecidos. Lo anterior, claramente implica la exigencia de una solemnidad en la acreditación de dicho período, por lo que –en principio- solamente es por ese medio que se puede acreditar el tiempo de cotización. Sin embargo, cuando el aludido documento no ha sido obtenido por desidia o incuria de la entidad de seguridad social colombiana, en el cumplimiento de su deber, esto es solicitar por intermedio de los organismos de enlace la emisión de la historia laboral española, tal regla probatoria debe flexibilizarse y verificarse si esos períodos pueden tenerse demostrados por otro medio distinto. En este caso, se trajo con la demanda un documento expedido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Reino de España –fls. 25 y ss-, en el cual se informa la vida laboral de la demandante en ese país, las empresas con las que ha laborado y los tiempos por los cuales lo ha hecho. Este documento, se aportó sin nota alguna de autenticación o apostilla, como lo exige el artículo 251 del CGP, sin embargo, debe precisarse que para este caso puntual, ante la inacción de las entidades demandadas en la obtención del documento exigido, a pesar de los varios requerimientos judiciales, el aludido documento debe validarse y hacer las veces del documentos exigido por el aludido convenio internacional. Además de tal documento, es indispensable tomar en consideración la conducta procesal de las partes, especialmente las demandadas, la cual ha sido claramente negligente ante los requerimientos judiciales.

Por tal razón, es claro que el aludido documento y su contenido, debe ser tenido en cuenta por esta Sala, ante la omisión gravísima de Colpensiones y del Ministerio de Trabajo, por lo que no puede negársele el valor probatorio a las copias aportadas por la parte actora, pues ello se convertiría en un premio al actuar desidioso de la entidad, dejando de lado la prevalencia del derecho de la demandante y dando al traste con unas aspiraciones legítimas y, además, sería hacer prevalecer lo procedimental sobre los sustancial, desconociendo mandatos superiores. Por lo tanto, insiste esta Sala que, si bien los documentos aportados por la actora no cuentan con las exigencias establecidas en el canon 251 del CGP, para ser tenidos como plena prueba, sí sirven como medio indiciario de los períodos laborados por la actora en España, de los cuales se puede inferir lógicamente y aunado, como ya se dijo, a la conducta procesal de las entidades demandadas, que la actora efectivamente laboró en España en los tiempos allí referidos. Así las cosas y como conclusión a este primer problema jurídico, se dirá que con los documentos obrantes en el proceso y bajo estas especiales circunstancias, es suficiente para tener por acreditados los períodos laborados por la actora en el Reino de España.

**Aplicación convenio Colombia España.**

Para desatar el segundo interrogante planteado, ha de decirse que mediante la Ley 1112 de 2006 se aprobó el convenio celebrado entre Colombia y España para efectos de la seguridad social.

En cuanto al ámbito material de aplicación del mismo, la ley en comento, en su artículo 2º, estableció lo siguiente:

*“1. El presente Convenio se aplicará:*

*a) En España:*

*A la Legislación relativa a las prestaciones contributivas del Sistema Español de la Seguridad Social, en lo que se refiere a incapacidad permanente, muerte y supervivencia por enfermedad común o accidente no laboral y jubilación.*

*b) En Colombia:*

*A la legislación relativa a las prestaciones económicas dispuestas en el Sistema General de Pensiones (Prima Media con Prestación Definida y Ahorro Individual con Solidaridad), en cuanto a vejez, invalidez y sobrevivientes, de origen común.*

*2. El presente Convenio se aplicará igualmente a la legislación que en el futuro complete o modifique la enumerada en el apartado precedente.*

*3. El Convenio se aplicará a las disposiciones que en una Parte Contratante extiendan la legislación vigente prevista en el apartado 1 de este artículo, a nuevos grupos de personas, siempre que la Autoridad Competente de la otra Parte no se oponga a ello dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la notificación de dichas disposiciones”.*

La norma, de manera clara, establece que el convenio suscrito entre Colombia y España, integrará las legislaciones de cada país en materia de seguridad social, debiéndose entender el concepto de legislación en los términos del literal del artículo 1º del aludido convenio, esto es “Las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones relativas a Seguridad Social vigentes en el territorio de las Partes Contratantes”. El anterior ámbito de vigencia material del convenio, permite colegir que las partes convinieron en aplicar la legislación de cada país, de manera integral y sin reservas, lo que en el caso puntual de Colombia, implica la integración del régimen de transición establecido en el canon 36 de la Ley 100 de 1993, así como las limitaciones al mismo contenidas en el Acto Legislativo 01 de 2005.

El artículo 8º de la Ley 1112 de 2006, establece que para efectos de acceder a una prestación en cualquiera de los países partes, que se genere con periodos de cotización *“la Institución Competente tendrá en cuenta a tal efecto, cuando sea necesario, los períodos de seguro o cotización cumplidos con arreglo a la legislación de la otra Parte Contratante”*. Esto no es cosa distinta a la sumatoria de tiempos o de periodos de cotización, que se hubieren efectuado en ambos países, lo que en últimas, era la finalidad del convenio.

En el caso bajo estudio, se tiene que la señora Lozano, cotizó un total de 1.014,59 semanas en Colombia al régimen administrado actualmente por Colpensiones y cotizó en el Reino de España un total de 3.796 días, de los cuales sin embargo, únicamente pueden tomarse en consideración 2.264 días, pues los restantes 1.532 fueron cotizados simultáneamente a Colpensiones, información toda esta que se refleja en el documento visible a folio 29, alcanzando un total de 1.338,01 semanas en toda su vida laboral y sumando los períodos de ambos países.

Establecido el número total de cotizaciones, debe entrar esta Sala a estudiar qué legislación debe aplicarse, para entrar a estudiar si –efectivamente- tiene o no derecho a la pensión de vejez.

Pues bien, se tiene que la demandante, al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 42 años de edad, por lo que de conformidad con el canon 36 de esa obra legal, es beneficiaria del régimen transicional, el cual se le mantiene hasta el año 2014, pues al momento de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, contaba con 935,01 semanas (676,44 Colpensiones y 258,57 al sistema de seguridad social de España).

En tal virtud, el caso de la actora debe estudiarse bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, norma que contempla en su artículo 12 que la pensión de vejez se causa cuando las mujeres alcanzan los 55 años de edad y un total de 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo. Frente al primero de los supuestos, se tiene que la demandante alcanzó los 55 años de edad el 05 de junio de 2006 y sumando el total de semanas en ambos países, la actora completó el 31 de enero de 2013 –fecha de la última cotización que aparece en el sistema Español- un total de 1.338,01 semanas, períodos más que suficientes para causar el derecho pensional.

Por lo tanto, para esta Sala es claro que, con la sumatoria de semanas en ambos países, se alcanza la densidad de cotizaciones exigidas para causar el derecho pensional, por lo que así se declarará.

**Forma de pago de la prestación pensional.**

Determinado ese primer punto, es del caso entrar a resolver el último de los cuestionamientos propuestos, esto es, la forma como la prestación debe ser pagada.

Pues bien, para ello es necesario –nuevamente- acudir al texto del acuerdo Colombo –Español que en su artículo 9º señala:

*“Con excepción de lo dispuesto en el artículo 18, el trabajador que haya estado sucesiva o alternativamente sometido a la legislación de una y otra Parte Contratante tendrá derecho a las prestaciones reguladas en este Capítulo en las condiciones siguientes:*

*1. La Institución Competente de cada Parte determinará el derecho y calculará la prestación, teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro o cotización acreditados en esa Parte.*

*2. Asimismo la Institución Competente de cada Parte determinará el derecho a prestaciones totalizando con los propios los períodos de seguro o cotización cumplidos bajo la legislación de la otra Parte. Cuando efectuada la totalización se alcance el derecho a la prestación, para el cálculo de la cuantía a pagar, se aplicarán las reglas siguientes:*

*a) Se determinará la cuantía de la prestación a la cual el interesado hubiera tenido derecho como si todos los períodos de seguro o cotización totalizados hubieran sido cumplidos bajo su propia legislación (pensión teórica);*

*b) El importe de la prestación se establecerá aplicando a la pensión teórica, calculada según su legislación, la misma proporción existente entre el período de seguro o cotización cumplido en la Parte a que pertenece la Institución que calcula la prestación y la totalidad de los períodos de seguro o cotización cumplidos en ambas Partes (pensión prorrata).*

*3. Determinados los derechos conforme se establece en los párrafos precedentes, la Institución Competente de cada Parte reconocerá y abonará la prestación que sea más favorable al interesado, independientemente de la resolución adoptada por la Institución Competente de la otra Parte”.*

Es clara la norma en establecer la obligación de las entidades de seguridad social, de verificar el monto de la pensión, teniendo como si todos los aportes se le hubieren efectuado a ella (pensión teórica) y, después de esto, determinar que parte o porción de la pensión teórica debe pagar cada institución de los Estados partes (pensión prorrata), siendo esa su obligación.

En cuanto a la base sobre la cual se debe liquidar la pensión reconocida con apoyo en este convenio, es necesario tener en cuenta lo referido en el artículo 15 de la Ley multicitada, la cual establece:

*“Para determinar el ingreso base de liquidación para el cálculo de las prestaciones que se reconozcan en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9o, apartado 2 del presente Convenio, la Institución Competente tomará el promedio de los salarios o rentas sobre las cuales haya cotizado el afiliado en Colombia durante los diez años anteriores al reconocimiento o el promedio de todo el tiempo estimado si éste fuere inferior.*

*Cuando el período requerido para la determinación de la Base Reguladora de la pensión corresponda a períodos de seguro cubiertos en España, la Institución Competente Colombiana fijará el período de los diez años para la base de cálculo respectiva en relación con la fecha de la última cotización efectuada en Colombia.*

*La cuantía resultante de este cálculo se ajustará hasta la fecha en que debe devengarse la prestación, de conformidad con su legislación”.*

Conforme a los fundamentos legales referidos, se observa que al momento de establecer el valor de la pensión es necesario tener en cuenta que la pensión se establece no conforme a los lineamientos de los artículos 36 o 21 de la ley 100 de 1993, sino que ante la especialidad de la pensión que se reconoce, debe obtenerse la base de liquidación conforme a lo señalado en el canon 15 de la Ley 1112 de 2006, inciso segundo.

Se procederá, en el caso concreto, a efectuar la liquidación conforme a dicha norma, encontrándose que la más beneficiosa es la de los 10 últimos años de cotización efectuados en Colombia, tal como se verifica en la siguiente tabla:



El valor antes dicho -$958.975- corresponde a la pensión teórica, siendo a cargo de Colpensiones únicamente el valor de la pensión prorrata, esto es la que corresponde a los aportes efectuados en Colombia. Como se totalizan 9.366 días cotizados en total, de los cuales 7.102 fueron cotizados a Colpensiones y 2.264 al sistema español de seguridad social, el valor de la pensión prorrata que incumbe pagar a Colpensiones es el 75.82%, debiendo esta entidad pagar únicamente este valor de la pensión, de conformidad con el numeral 3º del artículo 17 de la Ley 1112 inciso segundo, pues cuando se satisfagan los presupuestos señalados en la legislación española, se deberá reconocer el valor restante, por parte de la entidad a cargo en dicho país. Teniendo en cuenta que la reclamación de la pensión se hizo el 11 de julio de 2013 –fl. 32-, desde esta data se entenderá que operó el retiro del sistema y se dispondrá el disfrute de la prestación, por lo que se procede a establecer el retroactivo pensional, así:



Así las cosas, se condenará a Colpensiones a pagar a la actora la pensión prorrata respectiva, en la cuantía correspondiente (75.82%), debiendo además, en el término de un mes después de la ejecutoria de esta providencia, remitir la información necesaria por medio de los organismos de enlace correspondientes a las autoridades de seguridad social española para que, cuando se cumplan los supuestos legales de ese país, se reconozca allí la pensión prorrata restante.

Finalmente, en lo tocante a los réditos moratorios, encuentra esta Sala que el actuar de la entidad, sin duda, ha sido laxo en adelantar los trámites necesarios para, en aplicación del convenio Colombo Español, reconocer la prestación a la demandante. Por tanto, en aplicación del canon 141 de la Ley 100 de 1993, se dispondrá el reconocimiento y pago de los mismos, a partir del 12 de noviembre de 2013, atendiendo que la solicitud pensional se efectuó el 11 de julio de 2013 –fl. 32- y hasta que se haga efectivo el pago de lo adeudado.

Habida cuenta las consideraciones antes vertidas, se dirá que las excepciones propuestas por Colpensiones no tienen vocación de prosperidad, por lo que así se declarará. En cuanto al Ministerio del Trabajo, se le absolverá de las pretensiones, porque todas las obligaciones acá dispuestas están a cargo de Colpensiones, advirtiéndosele, en todo caso, que debe cumplir prontamente con las funciones que el convenio y el acuerdo administrativo le fijan como organismo de enlace.

Las costas en ambas instancias estarán a cargo de Colpensiones y a favor de la actora.

En mérito de lo expuesto, el ***H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral,*** administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

***FALLA***

1. ***Revocar*** la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 23 de febrero de 2016 y en su lugar:

***Primero: Declarar*** que la señora Martha Cecilia Lozano tiene derecho a que **Colpensiones** le reconozca y pague su pensión de vejez, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 y teniéndole en cuenta los períodos cotizados al sistema de seguridad social español.

***Segundo:*** **Declarar** que la señora Martha Cecilia Lozano tiene derecho, para el año 2013, a una pensión teórica de $958.975, de conformidad con el artículo 9º del convenio celebrado entre Colombia y España en materia de seguridad social, incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 1112 de 2006.

**Tercero: Condenar** a la  **Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones** para que reconozca y pague a la señora **Martha Cecilia Lozano** la pensión prorrata de la pensión de vejez, en cuantía del 75,82% de la pensión teórica señalada en el numeral anterior, a partir del 11 de julio de 2013 y hacia futuro, teniendo en cuenta los reajustes legales y una mesada adicional.

**Cuarto: Condenar** a la **Administradora** **Colombiana de Pensiones Colpensiones** a la obligación de hacer, consistente en remitir, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, la información necesaria por medio de los organismos de enlace correspondientes a las autoridades de seguridad social española para que, cuando se cumplan los supuestos legales de ese país, se reconozca allì la pensión prorrata restante, por medio de los formularios dispuestos para ello.

**Quinto: Condenar** a la **Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones** a pagar a la señora Martha Cecilia Lozano la suma de $56.485.208 por concepto de retroactivo de la pensión prorrata de la pensión de vejez, causado entre el 11 de julio de 2013 y el 31 de agosto de 2017.

**Sexto: *Condenar*** *a la* ***Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones*** a pagar a la señora Martha Cecilia Lozano los intereses moratorios de que trata el canon 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 12 de noviembre de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago de la prestación y del retroactivo.

**Séptimo:** ***Declarar no probadas*** *las excepciones propuestas por Colpensiones.*

***Octavo: Absolver al*** *Ministerio del Trabajo del presente asunto.*

***Noveno: Condenar*** *en costas de ambas instancias a la* ***Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones*** *a favor de* ***Martha Lucia Lozano.***

***NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE.***

La anterior decisión queda notificada en estrados.

**FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES**

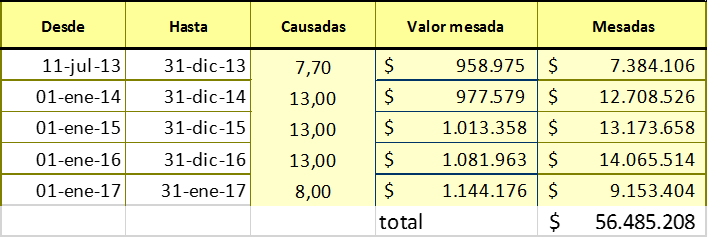
Magistrado Ponente

**OLGA LUCIA HOYOS SEPULVEDA ANA LUCIA CAICEDO CALDERON**  Magistrada Magistrada

**ANEXO I**



**ANEXO II**

****